1. Compatibilidad con el Principio de No Discriminación del Derecho Europeo e Internacional

La exclusión de ciudadanos de terceros países con residencia legal podría ser contraria a los principios de igualdad y no discriminación recogidos en los tratados y normas de la Unión Europea, especialmente en:

- Artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que prohíbe la discriminación por razones de nacionalidad, garantizando la igualdad de trato a todas las personas que residen legalmente en un Estado miembro.
- Directiva 2003/109/CE, sobre el estatuto de los residentes de larga duración, que establece que los ciudadanos de terceros países con residencia legal prolongada deben recibir un trato equiparable al de los ciudadanos de la UE en ámbitos como la educación, la asistencia social y la integración.

Al admitir a cualquier ciudadano con residencia legal, se refuerza la armonización de las políticas nacionales con la normativa europea, evitando prácticas excluyentes.

2. Garantía del Cumplimiento de los Requisitos Migratorios

La inclusión de ciudadanos de terceros países no contradice la normativa vigente en materia de control migratorio. El Reglamento (UE) 2016/399 del Código de Fronteras Schengen exige que los nacionales de terceros Estados que viajen a España acrediten: o Prueba de hospedaje o carta de invitación. o Billete de vuelta o de circuito turístico.

- o Medios económicos suficientes para la estancia.

La ampliación de beneficios no exige a los beneficiarios de cumplir con estos requisitos al momento de su entrada en territorio Schengen. Además, la modificación del artículo 2º exige residencia legal, lo que implica que los beneficiarios ya han superado los controles de admisión y permanencia establecidos por las normativas de extranjería.

3. Compatibilidad con la Ley de Extranjería y el Derecho Administrativo

En el ordenamiento español, la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en su artículo 14, establece que los extranjeros con residencia legal tienen derecho a acceder a los servicios y beneficios públicos en igualdad de condiciones con los nacionales, salvo en aquellos casos expresamente restringidos por ley.

Por lo tanto:

- o La exclusión de ciudadanos de terceros países podría contravenir el principio de igualdad de trato en el acceso a las ayudas públicas.
- o La medida es coherente con el sistema de protección social, ya que los residentes legales pueden acceder a prestaciones públicas siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

4. No Distorsión de la Acreditación de Medios Económicos

El Reglamento (UE) 2016/399 establece un mínimo de 118 euros por persona y día para estancias en España, con un umbral de 1.065 euros mínimo por estancia. Sin embargo, el apoyo de la Administración Local no afecta a este requisito, por las siguientes razones:

- o Los beneficiarios de la modificación del artículo 2º ya residen legalmente en algún territorio, por lo que no se trata de visitantes temporales sujetos a los criterios de entrada.
- o La subvención local no altera los requisitos migratorios, pues los beneficiarios ya han acreditado su capacidad de sustento al obtener su residencia legal.
- o Si bien la estancia en domicilio particular es una opción, ello no elimina la obligación de demostrar alojamiento previo en caso de entrada como turista.

5. Armonización con el Principio de Integración y Cohesión Social

El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo SOC/535 destaca la importancia de integrar a los ciudadanos de terceros países mediante medidas que faciliten su acceso a derechos y servicios. En este sentido:

- o La ampliación de beneficiarios fomenta la inclusión social, evitando situaciones de marginalización de residentes legales.
- o Genera cohesión económica y social, dado que los ciudadanos con residencia legal contribuyen con su trabajo e impuestos a la sostenibilidad del sistema.
- o Se ajusta a las políticas de la UE sobre integración de residentes extracomunitarios, lo que refuerza su viabilidad jurídica y administrativa.

Conclusión

La modificación del artículo 2º, al admitir a ciudadanos con residencia legal en cualquier territorio, es una medida jurídicamente viable y compatible con el derecho europeo e internacional. Además:

- o No vulnera las normativas de extranjería ni las condiciones de entrada a España.
- o Es acorde con el principio de igualdad de trato y no discriminación de residentes legales.
- o No interfiere en la exigencia de medios económicos, dado que la residencia legal ya implica el cumplimiento de requisitos previos.
- o Refuerza la cohesión social y la integración, en línea con las políticas de la UE.
- o Por tanto, la ampliación de beneficiarios es una medida coherente con el marco normativo vigente y con las políticas de inclusión social, garantizando un trato justo y equitativo a todos los residentes legales.